

Santiago, treinta y uno de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En la causa RUC N° 2300328046-2, RIT N° 269-2024, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, integrado por los jueces Fernán Rioseco Pinochet, Claudia Parra Villalobos y Claudio Correa Zacarías, por sentencia de veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, condenó a los acusados: Edward Fuenzalida Leiva, Miguel Acevedo Tauda, Luis Martínez-Conde Riesco, Matías Peralta Parra, Maximiliano Fuenzalida Leiva, Cristian Rodríguez Figueroa y Elizabeth Soto Soto por diversos delitos acreditados en el juicio oral realizado entre el 6 de agosto y el 2 de octubre de 2024.

Los hechos que se tuvieron por acreditados, consignados en el considerando vigésimo sexto de la sentencia fueron los siguientes:

“Hecho N°2: En días previos al 16 de marzo del año 2023, Luis Vicente Martínez-Conde Riesco, Edward Fuenzalida Leiva, Maximiliano Alexander Fuenzalida Leiva, Matías Ignacio Peralta Parra y Miguel Axel Acevedo Tauda, decidieron sustraer y planearon el robo del vehículo marca MG modelo 5, placa patente única RHGJ-51, para la cual se coordinaron y decidieron el día de ejecución del ilícito.

Así, el 16 de marzo del año 2023, en horas de la noche, y mientras la víctima identificada como Claudio Andrés Molina Carvajal, se encontraba en su domicilio particular ubicado en el sector de los Quillayes, sin número, sector de tomas Belloto Norte, Quilpué, ingresaron al lugar, chocando con un vehículo el portón de acceso al inmueble alrededor de seis sujetos con la intención de sustraer especies, entre ellos Edward Fuenzalida Leiva, apodado “gemelo



grande”; Maximiliano Alexander Fuenzalida Leiva, apodado “gemelo chico” o “Maxi”; Miguel Axel Acevedo Tauda, apodado “Tilín”; Matías Ignacio Peralta Parra, apodado “Guatón Matías” y Luis Vicente Martínez-Conde Riesco, procediendo a intimidar a la víctima con armas de fuego para sustraerle dinero en efectivo -alrededor de \$200.000.- un teléfono celular marca Xiaomi modelo Redmi y el vehículo marca MG modelo 5, color gris metálico, placa patente única, RHGJ-51, para luego huir del domicilio, en el vehículo sustraído y en el vehículo en el que llegaron. En dicho contexto, y debido a que el vehículo marca MG tenía corta corriente, lo que impedía llevárselo, regresó uno de los dos individuos, conocido como “Gemelo”, junto con Miguel Acevedo Tauda, instancia en que el sujeto apodado como “Gemelo” le dispara a Claudio Molina Carvajal en una pierna, dándose a la fuga con las pertenencias del afectado y con el vehículo sustraído.

A consecuencia de la acción de los imputados, la víctima resultó con herida por arma de fuego en muslo derecho.

Hecho N°3: Con posterioridad al robo, en el que los imputados sustrajeron el vehículo Marca MG, los acusados Luis Vicente Martínez-Conde Riesco, Edward Fuenzalida Leiva y Miguel Axel Acevedo Tauda, decidieron sustraer otro vehículo, para lo cual se coordinaron en forma previa, ubicando el vehículo que decidieron sustraer, buscando los datos de la patente de dicho móvil y fotografiándolo en el exterior del domicilio de la víctima.

Así, el día 18 de marzo del año 2023, Stephano Hernández Urizar, alrededor de las 23:00 horas se dirigió en su camioneta marca Mitsubishi, modelo L-200, color rojo PPU JXYX-59. hasta el pasaje volcán San Pablo, sector Los Pinos, Quilpué, para entregar la billetera de un amigo que se había quedado en su



móvil, retirándose inmediatamente hacia su domicilio ubicado en pasaje Contramaestre Brito N°3044, población Teniente Serrano, Quilpué. Desde ese sector específicamente de la calle Las Barrancas con calle Valle del Paraíso, Quilpué, los imputados Luis Vicente Martínez Conde Riesco, Edward Fuenzalida Leiva y Miguel Axel Acevedo Tauda, a bordo del vehículo marca MG modelo 5, placa patente RHGJ-51, color gris plata que habían sustraído el 16 de marzo, comenzaron a seguir a la víctima por calle Valle del Paraíso para luego girar en Calle almirante Gerken y en el pasaje Contramaestre Brito, siempre detrás del vehículo de la víctima, quien, al llegar a su domicilio abrió el portón eléctrico del inmueble e ingresó su camioneta al antejardín. Cuando Stephano Hernández Urizar esperaba el cierre del portón, fue abordado por los acusados, con la finalidad apropiatoria ya mencionada, lapso en que la víctima, manteniendo las puertas de la camioneta con seguro pudo reaccionar frente a la acción de los imputados y con la finalidad de evitar el robo, retrocedió en el vehículo chocando contra el muro perimetral y portón eléctrico de su domicilio, momento en el cual uno de los imputados le dispara a través de la ventana del piloto, provocándole lesiones, dándose a la fuga los acusados a bordo del vehículo MG, retrocediendo, girando por calle Almirante Gerken para huir por esa calle hasta avenida Marga Marga, donde giraron en dirección al camino lo Orozco para dirigirse al sector de Las Palmas, Cerro Placeres, Valparaíso. Stephano Hernández Urizar fue asistido por sus padres y vecinos, quienes lo trasladaron hasta el hospital de Quilpué, donde falleció el 20 de marzo del 2023, producto de las lesiones, siendo la causa de muerte establecida por el Servicio Médico Legal de Valparaíso: Laceración Cerebral y aórtica, Homicidio con arma de fuego.



Hecho N°4: Que previo a la madrugada del día 26 de marzo del año 2023, los acusados Luis Vicente Martínez-Conde Riesco, Edward Fuenzalida Leiva, Maximiliano Alexander Fuenzalida Leiva, Matías Ignacio Peralta Parra, Miguel Axel Acevedo Tauda y Cristian Rodríguez Figueroa, organizaron y planificaron la comisión de un robo en el domicilio de Esteban Alejandro Ríos Presmita, ubicado en Río Toltén, N°1230, Belloto, Quilpué, para lo cual, entre otras actividades, el día anterior, vigilaron y grabaron dicho domicilio.

Posteriormente, la madrugada del día 26 de marzo del año 2023, concurrieron alrededor de la 01:00 de la madrugada, a bordo del vehículo placa patente única DWVB-19, de propiedad de Génesis Jared Acevedo Tauda, hermana de Miguel Axel Acevedo Tauda, hasta las inmediaciones del domicilio de la víctima, por el sector de la calle Ramón Ángel Jara. Con el objetivo de cometer el delito, concurrieron, preparados, portando guantes y gorros, y armados, sin autorización, con distintas armas de fuego, pistolas y revólver, para lo cual Vicente Martínez-Conde Riesco, Edward y Maximiliano Fuenzalida Leiva, Matías Peralta Parra, y Miguel Acevedo Tauda, ingresaron a través del cierre perimetral. Una vez en el lugar, mientras la víctima, ya individualizada, se encontraba en el segundo piso del domicilio, los imputados ingresaron intimidando con un arma de fuego a la hija de la víctima, de nombre Melanie, y después apuntando a Ríos Presmita, con un arma en la cabeza, empujando a los afectados quienes quedaron en posición fetal, cubriéndoles a ambos la cabeza, preguntando y exigiendo reiteradamente a las víctimas la entrega de “droga y plata”. Ante esto, y luego de ingresar a la misma habitación a un tercer ocupante del domicilio, identificado como Gian Franco Kirkman Vidal, el cual pernoctaba en una dependencia posterior del



inmueble, Ríos Presmita les indicó que su ocupación es ser feriante, señalando el lugar donde se encontraba la recaudación del día. En tales circunstancias, uno de los sujetos golpeó con la culata de una pistola en la cabeza a la víctima Ríos Presmita, ocasionándole lesiones. Los sujetos, luego de la revisión de distintas dependencias, sustrajeron dinero en efectivo -que el ofendido indicó primariamente que alcanzaba a la suma de \$1.300.000.-; cuatro anillos de oro, uno en forma de tigre, uno con forma de águila, otro con forma de dragón y un último con forma de lobo; adicionalmente de las llaves de la camioneta marca Chevrolet, Silverado, año 2021, placa patente PBCR-55. Todas las especies valuadas por la víctima entre \$5.000.000 y \$6.000.000.

Pocos momentos después de la entrada de los sujetos al interior del domicilio, alertados por vecinos del sector, concurrió una patrulla de Carabineros, al mando del Sargento 1º José Luis Quezada Flores, acompañado del Cabo 2º Gustavo Campos Araya, de dotación de la Tenencia Belloto. Al llegar al lugar advierten la presencia de alrededor de cuatro hombres, momento en que los imputados al percatarse de la llegada de personal de Carabineros, comenzaron a huir del lugar, escapando por distintos domicilios hacia la calle posterior de dicho inmueble, esto es, calle Ramón Ángel Jara, sector Belloto, lugar donde los esperaba el vehículo Chevrolet Sonic, placa patente única DWVB-19 a cargo de Cristian Rodríguez Figueroa.

Paralelamente, en el vehículo RP institucional de Carabineros, al mando de la Suboficial Mayor Rita Andrea Olivares Raio, quien era acompañada por el Sargento 2º Ronald



Arol Rivera López, quien conducía dicho móvil, acudieron al llamado del otro dispositivo dirigiéndose en el vehículo policial por calle Ramón Ángel Jara, percatándose de la presencia de sujetos que huían raudamente del lugar, relacionándolos de inmediato con aquellos que podían estar involucrados en el robo. En estos momentos los imputados tratan de huir en el vehículo que los esperaba con su conductor, Cristian Rodríguez Figueroa, procediendo de inmediato a efectuar disparos con ánimo de matar en contra del personal policial que llegaba en el radio patrulla, el que les impedía el paso.

La Suboficial Mayor Rita Andrea Olivares Raio, una vez que el vehículo policial se detuvo quedando el vehículo de los imputados al costado derecho del radio patrulla, procedió a abrir la puerta, para tratar de bajar del vehículo, recibiendo de manera inmediata un disparo en la cabeza, en la región parietal derecha, causándole laceraciones cerebrales por proyectil de arma de fuego, quien por la gravedad de sus lesiones fue trasladada al hospital de Quilpué, lugar donde falleció.

Con el objeto de repeler el ataque de los imputados, el Sargento Rivera López efectuó diversos disparos en contra de éstos, sumándose también a dicha acción la otra patrulla, bajándose de la misma el Sargento Quezada, quien dispara en contra de los imputados que -a su vez- le disparaban y huían por diversas calles del sector.

Momentos después, fue detenido en el lugar el imputado Edward Fuenzalida Leiva, escondido entre la vegetación quien tenía adosado a su cintura un estuche de arma vacío. Los demás imputados huyeron del lugar quedando abandonado el móvil en el que pretendían huir.



Hecho N° 5: Posteriormente el día 28 de marzo del año 2023, en virtud de orden de entrada y registro emanada del Juzgado de Garantía de Quilpué, personal de la PDI ingresó al domicilio ubicado en Población Las Palmas, Block 265, Departamento 24 Cerro Los Placeres, Valparaíso que corresponde a un segundo piso, departamento con cortinas rojas, percatándose que se mantenían en el lugar Maximiliano Fuenzalida Leiva, Matías Ignacio Peralta Parra y Elizabeth Soto Soto, quienes mantenían en el lugar las siguientes especies: al interior de una caja de árbol de Navidad una escopeta de repetición marca Mossberg calibre 12, con su número de serie borrado; al interior de una mochila marca Maui, dos cartuchos de escopeta calibre 12; una caja con 50 cartuchos de revólver calibre .38; una caja con 19 cartuchos de revólver calibre .38 especial y un cartucho calibre .38 especial corto; una caja con 25 cartuchos de pistola calibre 9 milímetros; una caja de material sintético marca Lancôme contenedora de 13 cilindros de color negro contenedora de una sustancia de color blanco que correspondía a cocaína; adicionalmente de una Tablet marca Samsung; un teléfono celular marca Apple, modelo iPhone 11.

Al interior de un cajón del closet éstos mantenían una pistola marca Bersa de procedencia argentina, modelo Thunder Ultra compact Pro, calibre .40, número de serie E70331, con un cargador contenedor de nueve cartuchos calibre .40. Consultada dicha arma a la Dirección General de Movilización Nacional, no existe registro de inscripción de la misma.

También mantenían en el closet una bolsa de color azul, contenedora de un cargador negro marca Bersa calibre 9 milímetros; 15 cartuchos calibre .45; un cartucho calibre .40; al interior de otro cajón del closet habían dos reproductores



de música marca Apple, modelo IPod y cuatro teléfonos celulares de diferentes modelos.

Al interior de una caja blanca mantenían una pistola marca Glock modelo 43, calibre 9 milímetros, con su número de serie borrado, con un cargador contenedor de 5 cartuchos 9 milímetros; 3 cartuchos de escopeta calibre 12; un calcetín negro contenedor de 26 cartuchos, .38 especial; y un teléfono celular marca Apple modelo iPhone. En total 155 municiones de diversos calibres.

En el interior del closet, los imputados, mantenían una caja fuerte marca Fixser, color gris, con panel digital y ranura con llave; al interior de la caja fuerte mantenían una balanza digital sin marca; un monedero marca Adidas color anaranjado fosforescente; una llave de auto marca JMN con un llavero del equipo de futbol Flamengo; un recipiente rectangular transparente en cuyo interior se mantenía una sustancia de color blanco; adicionalmente de un banano negro, un cosmetiquero y otros productos cosméticos; una llave de auto marca Chevrolet; 10 cadenas de color dorado; 10 anillos de color dorado; 11 aros de color dorado; dos anillos metálicos; un colgante donde se lee Amaro; tres relojes; adicionalmente de dinero: 130 pesos argentinos; 1.266 reales brasileiros; 83 dólares norteamericanos; 980.000 pesos colombianos; 260 soles peruanos; 26.000 pesos mexicanos; 2.500 coronas noruegas; 1.205 euros; 330.000 pesos chilenos y 1.120 dólares canadienses.

Respecto de las sustancias encontradas, dubitadas como cocaína, efectuadas las pruebas periciales correspondientes, se determinó que correspondían a 139.14 gramos netos de clorhidrato de cocaína con un grado de pureza del 78% y 22.04 gramos netos de ketamina. Para la tenencia con fines de



tráfico y para la tenencia de las armas, los acusados no tenían autorización. Además Elizabeth Soto Soto, albergaba y ocultaba en dicho inmueble, que es su domicilio, a los imputados Maximiliano Fuenzalida Leiva y Matías Ignacio Peralta Parra, conociendo el delito ocurrido la madrugada del 26 de marzo de 2023.”

La calificación jurídica de los hechos acreditados fue la siguiente:

Hecho N°2: Robo con violencia, previsto y sancionado en el artículo 436 inciso primero, en relación con el artículo 432, ambas disposiciones del Código Penal, y porte ilegal de arma de fuego contemplado en el artículo 9 de la Ley 17.798 en relación con el artículo 2 letra b) del mismo cuerpo legal.

Hecho N°3: Robo con homicidio, contemplado en el artículo 433 N°1, en relación con el artículo 432, ambas disposiciones del Código Penal, y porte ilegal de arma de fuego contemplado en el artículo 9 de la Ley 17.798 en relación con el artículo 2 letra b) del mismo cuerpo legal.

Hecho N° 4: Robo con violencia e intimidación, previsto y sancionado en el artículo 436 inciso primero, en relación con el artículo 432, ambas disposiciones del Código Penal, porte ilegal de arma de fuego contemplado en el artículo 9 de la Ley 17.798 en relación con el artículo 2 letra b) del mismo cuerpo legal, homicidio consumado de funcionario de Carabineros en ejercicio de sus funciones y dos homicidios tentados de funcionario de Carabineros en ejercicio de sus funciones, previstos y sancionados en el artículo 416 del Código de Justicia Militar.

Hecho N° 5: Tenencia ilegal de arma de fuego prohibida previsto y sancionado en el artículo 13 de la Ley sobre Control de Armas, tenencia ilegal de municiones consumado, contemplado en el artículo 9 en relación con el artículo 2



letra c) de la misma Ley y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3, con relación al artículo 1 de la Ley 20.000.

Los sentenciados fueron condenados a las siguientes penas: I.- Los acusados Edward Fuenzalida Leiva, Luis Vicente Martínez-Conde Riesco y Miguel Axel Acevedo Tauda:

a.- Como autores de los delitos de: **robo con violencia en la persona de Claudio Molina Carvajal**, consumado; **robo con intimidación y violencia, en perjuicio de Esteban Ríos Presmita**, consumado y **robo con homicidio en la persona de Stephano Hernández Urizar**, en grado de desarrollo frustrado; a la pena única de Presidio Perpetuo Calificado, y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de vida de los condenados y la sujeción a la vigilancia de la autoridad en su máximo.

b.- Como autores de **tres** delitos de **porte ilegal de arma de fuego**, consumados, contemplados en el artículo 9 de la Ley 17.798 en relación con el artículo 2 letra b) del mismo cuerpo legal; a la pena única de ocho (8) años de presidio mayor en su grado mínimo y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

c.- Como autores del delito de **Homicidio consumado de funcionario de Carabineros en el ejercicio de sus funciones, respecto de la Suboficial Mayor Rita Olivares Raio**, a la pena de presidio perpetuo simple, y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de vida de los condenados y la sujeción a la vigilancia de la autoridad en su máximo.



d.- Como autores de **dos delitos de Homicidio tentado de funcionarios de Carabineros en el ejercicio de sus funciones, respectos del Sargento 1º José Luis Quezada Flores y el Sargento 2º Ronald Arol Rivera López**; a la pena única de diez (10) años y un (1) día de presidio mayor en su grado medio y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

II.- Los acusados Maximiliano Fuenzalida Leiva y Matías Ignacio Peralta Parra, a las siguientes penas:

a.- Como autores de los delitos de **robo con violencia en la persona de Claudio Molina Carvajal**, consumado, y **robo con intimidación y violencia, en perjuicio de Esteban Ríos Presmita**, consumado; a la pena única de veinte (20) años de presidio mayor en su grado máximo y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

b.- Como autores de **dos delitos de porte ilegal de arma de fuego**, consumados, un delito de tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas, consumado y un ilícito de tenencia ilegal de municiones; a la pena única de once (11) años de presidio mayor en su grado medio y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

c.- Como autores del delito de **Homicidio consumado de funcionaria de Carabineros en el ejercicio de sus funciones, respecto de la Suboficial Mayor**



Rita Olivares Raio; a la pena de presidio perpetuo simple, y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de vida de los condenados y la sujeción a la vigilancia de la autoridad en su máximo.

d.- Como autores de **dos delitos de Homicidio tentado de funcionarios de Carabineros en el ejercicio de sus funciones, respectos del Sargento 1º José Luis Quezada Flores y el Sargento 2º Ronald Arol Rivera López**; a la pena única de diez (10) años y un (1) día de presidio mayor en su grado medio y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

e.- Como autores del delito de **Tráfico ilícito de estupefacientes**, en grado consumado, a la pena de cinco (5) años y un (1) día de presidio mayor en su grado mínimo, al pago de una Multa de cuarenta (40) Unidades Tributarias Mensuales equivalentes en moneda nacional, a la fecha de su pago, y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

III.- Al acusado Cristián Alejandro Rodríguez Figueroa, a las siguientes penas:

a.- Como autor del delito **robo con intimidación y violencia, en perjuicio de Esteban Ríos Presmita**, consumado, a la pena diez (10) años de presidio mayor en su grado mínimo y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para



cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

b.- Como autor de un delito de **porte ilegal de arma de fuego**, consumado; a la pena de cuatro (4) años de presidio menor en su grado máximo y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

c.- Como autor del delito de **Homicidio consumado de funcionario de Carabineros en el ejercicio de sus funciones, respecto de la Suboficial Mayor Rita Olivares Raio**; a la pena de presidio perpetuo simple, y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de vida del condenado y la sujeción a la vigilancia de la autoridad en su máximo.

d.- Como autor de **dos delitos de Homicidio tentado de funcionarios de Carabineros en el ejercicio de sus funciones, respectos del Sargento 1º José Luis Quezada Flores y el Sargento 2º Ronald Arol Rivera López**; a la pena única de diez (10) años y un (1) día de presidio mayor en su grado medio y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

IV.- A la acusada Elizabeth Alejandra Soto Soto, a las siguientes penas:

a.- Como **encubridora** de los delitos de robo con intimidación y violencia, en perjuicio de Esteban Ríos Presmita, porte ilegal de arma de fuego, Homicidio consumado de funcionario de Carabineros en el ejercicio de sus funciones, respecto de la Suboficial Mayor Rita Olivares Raio, y dos delitos de Homicidio



tentado de funcionarios de Carabineros en el ejercicio de sus funciones, respectos del Sargento 1º José Luis Quezada Flores y el Sargento 2º Ronald Arol Rivera López; a la pena única de seis (6) años de presidio mayor en su grado mínimo y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

b.- Como autora de un delito de **tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas**, consumado, a la pena de tres (3) años y un (1) día de presidio menor en su grado máximo, y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

c.- Como autora de un ilícito de **tenencia ilegal de municiones**, consumado; a la pena de quinientos cuarenta y un (541) días de presidio menor en su grado medio y accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

d.- Como autora del delito de **Tráfico ilícito de estupefacientes**, en grado consumado; a la pena de cinco (5) años y un (1) día de presidio mayor en su grado mínimo, al pago de una Multa de cuarenta (40) Unidades Tributarias Mensuales equivalentes en moneda nacional, a la fecha de su pago, y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.



En contra de dicha decisión, las defensas de todos los condenados ya individualizados interpusieron recursos de nulidad, los que fueron conocidos en la audiencia pública celebrada el día trece de enero del año en curso.

CONSIDERANDO:

1°) Que, para mayor claridad, ya que existen causales comunes esgrimidas por las defensas de los sentenciados, fundadas en alegaciones comunes, estas serán analizadas conjuntamente, aun cuando fueron invocadas separadamente. Solo se analizará de manera individual aquella causal invocada de manera exclusiva, como es la principal contenida en el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado Acevedo.

2°) Que, comenzando por la causal de nulidad contemplada en el artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, vinculada al artículo 85 del mismo cuerpo legal y al artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la República, contenida únicamente en el recurso de nulidad deducido por la defensa pública del sentenciado Miguel Acevedo Tauda, quien la interpone de manera principal al resto de sus alegaciones desarrolladas en los considerandos posteriores del presente fallo. En aquella, se denuncia que las actuaciones policiales realizadas respecto de Acevedo Tauda el día de su detención vulneraron derechos fundamentales del sentenciado, específicamente en lo relativo al control de identidad, registro y exámenes corporales. Argumenta la defensa que su representado permaneció en la unidad policial a la que fue conducido ilegalmente producto de un control de identidad sin indicios que lo justificaran y, en ese escenario, estuvo detenido sin mediar causal de flagrancia u orden de detención, siendo objeto de diligencias de investigación ilegales. Estas se realizaron sin



autorización en circunstancias en que el sentenciado ya había otorgado su identidad a los funcionarios policiales, quienes, no obstante aquello, lo retuvieron ilegalmente en la unidad policial durante varias horas.

3°) En primer lugar, es preciso señalar que las circunstancias que motivaron el control de identidad y registro al que fue sometido el sentenciado ya individualizado fueron materia de prueba y debate en el juicio. Por ello, es necesario remitirse a lo asentado por los jueces de la instancia al ponderar las evidencias aportadas a la litis, sin que sea dable que, para tales efectos, esta Corte Suprema, con ocasión del estudio de la causal de nulidad propuesta, efectúe una nueva valoración de esas probanzas y fije hechos distintos a los ya determinados por el Tribunal Oral, que apreció íntegra y directamente la prueba rendida.

En segundo lugar, es útil recordar que el artículo 85 del Código Procesal Penal establece que corresponde a los policías apreciar la procedencia del control y, por ende, de un indicio habilitante para realizarlo “según las circunstancias” del caso. De aquello se recibió prueba por el Tribunal de Fondo, y conforme a los sustratos fácticos establecidos, el fallo tuvo por cierto que los funcionarios policiales contaron con indicios suficientes para controlar la identidad de uno de los pasajeros del vehículo conducido por la testigo Melissa Núñez Veras, aportados por la acompañante de la conductora, la testigo María Francisca Valdivia. Esta última dio cuenta de un sujeto que abordó el vehículo tras salir de unos matorrales ubicados en las inmediaciones del sitio del suceso, donde momentos antes se había dado muerte a una funcionaria de Carabineros, quien formaba parte de una patrulla que intentó detener a los autores de un robo con



violencia cometido en un domicilio particular en Quilpué, hecho que, por su trascendencia, se había difundido rápidamente a nivel policial y también en la población.

La segunda testigo mencionada aportó otros datos, a través de su teléfono celular, a un funcionario de Carabineros, que vinculaban al extraño pasajero con un vehículo de características similares al involucrado en el evento policial recién acontecido. Con esa información, se efectuó el control de identidad de Acevedo Tauda, el cual habilitaba a los funcionarios de Carabineros a efectuar un registro de vestimentas, en el que encontraron una llave de vehículo. Posteriormente, se descubrió que dicha llave pertenecía al vehículo sustraído en el robo que antecedió al homicidio de la funcionaria de Carabineros, lo que provocó la detención en flagrancia del hoy sentenciado Miguel Acevedo Tauda. Las diligencias policiales realizadas a partir de dicha detención se enmarcan dentro de las facultades que los artículos 81 y siguientes del Código Procesal Penal entregan a los funcionarios policiales.

Los cuestionamientos a la lectura de derechos del detenido y a la autorización otorgada por este para la práctica de la diligencia de examen corporal (hisopado bucal), fundados en la ausencia de dichas garantías, no resultaron acreditados en el juicio, luego de escuchar los relatos de los funcionarios policiales involucrados en tales diligencias: el Cabo 1º de Carabineros Carlos Mario Ángel Pedreros Cartes, el Suboficial mayor de Carabineros Álvaro Alejandro Yáñez Castro y el Cabo 1º de Carabineros Joel Alberto Ñancucheo Villafaña, además del comisario de la PDI Víctor Luis Yáñez Larach y la exhibición e incorporación del Formulario único de cadena de custodia NUE 5455882 correspondiente a la



documental C-8, sobre el levantamiento de la especie del pantalón del bolsillo derecho del imputado Miguel Acevedo Tauda. Así, el Tribunal Oral dio por probado que dichas actividades se ejecutaron con apego a la ley, descartando la versión alternativa prestada por Acevedo en el juicio por primera vez, según lo expresado en la sentencia recurrida.

Además, como se observa en el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, no se rindió prueba suficiente para demostrar las irregularidades alegadas. Las actuaciones policiales cuestionadas fueron realizadas en el marco de las facultades legales y, por ello, no afectaron la validez de las pruebas rendidas en el juicio. Considerando lo anterior y lo expuesto por los intervinientes en este estrado, no resulta posible determinar la existencia de los vicios reclamados, los cuales, según lo expuesto por el recurrente, tendrían su génesis en el control de identidad realizado al sentenciado en los términos descritos en la sentencia y referidos previamente. De ese modo, los policías que realizaron la diligencia de control de identidad actuaron conforme a las facultades concedidas por la ley y, por tanto, los jueces que valoraron la prueba proveniente de dicha actuación no han afectado los derechos referidos en el recurso, motivos por los cuales este deberá ser desestimado.^{4°}) Que las defensas de los acusados Cristian Rodríguez Figueroa, Edward Fuenzalida y Miguel Acevedo invocaron la causal de nulidad contenida en el artículo 374 letra e), en relación con el artículo 342 letra c) y 297, todos del Código Procesal Penal. Los dos primeros como causal principal y el último de los nombrados como causal subsidiaria de la analizada en los considerandos precedentes del presente fallo, respecto de los hechos que en cada caso se indican. Las defensas de los acusados previamente



individualizados desarrollaron la causal alegando falta de fundamentación en la sentencia. Así, la defensa pública de Cristian Rodríguez reclama, principalmente, la ausencia de pruebas suficientes para vincular a su representado directamente con el porte de armas de fuego y con los disparos a funcionarios de Carabineros, que conforman parte del hecho N.º 4 descrito en la sentencia, concluyendo que la inferencia de un “dolo eventual” compartido entre todos los acusados sería ilógica e insuficientemente fundamentada por los sentenciadores.

Por su parte, la defensa pública de Edward Fuenzalida fundamenta la causal de nulidad referida en la imposibilidad, a su juicio, de entender el razonamiento del tribunal al momento de determinar la participación de su representado en el hecho N.º 2 descrito en la sentencia. Esto, principalmente, porque la víctima del delito de robo con violencia e intimidación no declaró en el juicio oral.

Finalmente, la defensa pública de Miguel Acevedo, invocando dicha causal como subsidiaria, sostiene que las pruebas que los sentenciadores consideraron para vincular a su representado con el hecho N.º 4 descrito en la sentencia carecerían de fuerza suficiente para demostrar su responsabilidad penal en los delitos allí contenidos.

En relación con las alegaciones planteadas al invocar la causal en análisis, es importante destacar que el deber de fundamentación que debe cumplir el fallo, en cuanto a los hechos, implica presentar una justificación detallada y específica de la decisión de considerar ciertos hechos como acreditados. Esta justificación debe estar basada en los elementos probatorios presentados durante el litigio y respetar las garantías propias del juicio oral. Este deber no solo busca facilitar la



comprensión del fallo, sino también asegurar que las premisas fácticas de la resolución sean determinadas de manera racional y fundamentada (SCS N.º 92.094-2020, de 14 de septiembre de 2020). El cumplimiento de esta exigencia permite, además, que los tribunales superiores supervisen la actividad jurisdiccional a través de los recursos procesales disponibles. Desde un punto de vista jurídico, la finalidad de esta garantía radica en que, al exponer las razones de una resolución, se hace posible evaluar si la actuación judicial se ha desarrollado dentro de los límites de la lógica y la legalidad, o si, por el contrario, resulta arbitraria. En nuestro sistema jurídico, las resoluciones judiciales no deben ser el resultado de actos discrecionales o meras impresiones de los jueces. Por el contrario, deben basarse en una evaluación razonada de las pruebas y antecedentes presentados durante el juicio oral, y dicha evaluación debe plasmarse en una explicación clara y racional que justifique la decisión tomada, de modo que cualquier tercero, mediante un análisis lógico, pueda comprenderla.

Esta noción se vincula con una concepción racional de la prueba, que exige que su valoración consista en un proceso lógico y sistemático para determinar la veracidad o falsedad de las proposiciones sobre los hechos, con base en las conexiones argumentativas entre estas y las pruebas presentadas. Dicho lo anterior, esta Corte advierte que el fallo recurrido contiene una exposición clara, lógica y completa de los hechos que se tuvieron por acreditados, cumpliendo con los requisitos del artículo 342 del Código Procesal Penal, de modo que las alegaciones de los recurrentes no logran desvirtuar la estructura racional y la motivación de la sentencia. Dichos argumentos, más allá de cuestionar la



valoración de la prueba realizada por el Tribunal Oral en lo Penal, no logran demostrar que dicha valoración se haya apartado de los principios de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados. En consecuencia, no se configuran los presupuestos necesarios para anular la sentencia en lo que a este capítulo concierne. Es importante mencionar que la causal en estudio, invocada por las defensas, faculta al tribunal que conoce del recurso de nulidad para controlar si los jueces del grado, al valorar libremente las probanzas aportadas por los intervinientes, han contradicho los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Es decir, debe tutelarse que en el proceso de apreciación y valoración probatoria —efectuado por el tribunal del grado conforme a las reglas de la sana crítica— no se sobrepasen los parámetros de ponderación inherentes a dichas reglas, no siendo suficiente, por ende, para anular un razonamiento, el solo hecho de disentir del mismo. Del tenor de los recursos puede concluirse que lo que se intenta impugnar es la valoración de la prueba que hizo el tribunal y, con base en ella, fijó los hechos conforme a los cuales calificó la participación de cada uno de los acusados en los diferentes delitos, lo cual escapa al control de esta Corte en un recurso de derecho estricto. Por lo tanto, este motivo de nulidad deberá ser rechazado.

5°) Que las defensas de los acusados Edward Fuenzalida Leiva, Miguel Acevedo Tauda y Luis Martínez-Conde Riesco invocaron la causal de nulidad prevista en el artículo 373 letra b), al considerar que los sentenciadores incurrieron en una errónea aplicación de derecho respecto de la calificación jurídica que asignaron a parte del hecho N.º 4 consignado en la sentencia. Esto se refiere al



delito de robo con homicidio previsto y sancionado en el artículo 433 del Código Penal, cometido en perjuicio de Stephano Hernández Urizar. Las defensas consideran que los hechos probados al respecto serían constitutivos de un concurso material de delitos: un robo con intimidación y un homicidio simple, y que, a esa sazón, debieron ser condenados sus representados bajo esa calificación.

En efecto, la defensa de Acevedo sostuvo que, para cometer el delito de robo con homicidio, la apropiación debió haberse consumado, lo que no ocurrió en la especie. De manera que, a su juicio, ello impide la aplicación del tipo penal agravado.

El artículo 433 N.º 1 del Código Penal dispone que: “El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado:

1º. Con presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo calificado cuando, con motivo u ocasión del robo, se cometiere, adicionalmente, homicidio, violación o alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, N.º 1º”.

Para el análisis de esta causal de nulidad, es menester reiterar que respecto de los hechos que son objeto de calificación jurídica, debe estarse a lo asentado por los jueces de la instancia al ponderar las evidencias aportadas en el juicio oral. Dicho aquello, se procederá al análisis de las alegaciones comunes de las defensas ya individualizadas que fundan la causal de errónea aplicación del



derecho postulada, con arreglo a los hechos que se dieron por probados. La estructura del robo con homicidio es múltiple y compleja; será lo ordinario que la ejecución de los actos constitutivos de este tipo penal esté dividida entre los distintos autores. Para que se pueda imputar este delito a varios autores, es necesario que el dolo sea convergente en el objetivo de robar y matar. Así, cada coautor responde del hecho final, siempre que este permanezca en el ámbito de la decisión común acordada previamente.

Teniendo en cuenta lo anterior, el mérito de los hechos acreditados en la sentencia cuya nulidad se reclama permite colegir que las alegaciones de los acusados Fuenzalida, Acevedo y Martínez-Conde omiten que la sentencia expresamente estableció como hecho probado que: “Los acusados Luis Vicente Martínez-Conde Riesco, Edward Fuenzalida Leiva y Miguel Axel Acevedo Tauda decidieron sustraer otro vehículo, para lo cual se coordinaron en forma previa, ubicando el vehículo que decidieron sustraer, buscando los datos de la patente de dicho móvil y fotografiándolo en el exterior del domicilio de la víctima...”. En atención a la situación fáctica señalada, al concertarse dos o más personas para realizar en conjunto un delito de apropiación violenta utilizando armas de fuego para lograr su cometido, bajo la fórmula de los artículos 432 y 436 del Código Penal, los coautores actúan con un dolo común. Participan todos ellos en un concurso subjetivo, pues convergen sus voluntades, produciéndose un doble concurso objetivo (hechos) y subjetivo (voluntades), que permite que la responsabilidad se aprecie de manera común. Como señala A. Etcheverry: “Si no existe este doble concurso, la conducta y la responsabilidad penal de cada uno deben apreciarse en forma independiente”



(Derecho Penal. Parte General, Ed. Jurídica de Chile, t. II, 3.^a ed., Santiago, 1999, p. 77).

De esta manera, esta Corte reitera que los coautores realizan un hecho común que interesa al conjunto de ejecutores considerados como un todo y con el cual cada uno se siente partícipe y acepta el hecho colectivo como una meta común. Ello hace que cada uno sea un hechor tanto por sí mismo como por la actividad del conjunto, pues o bien lo estiman como suyo o al menos es aceptado como posibilidad, al estar bajo el acuerdo común. Así, la responsabilidad de cada coautor se determina conforme al contenido de la resolución conjunta.

En el caso particular, resultó asentado por el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar que los coautores ya individualizados planificaron el robo del vehículo, habiéndose preparado para la comisión del hecho delictivo, ubicando su objetivo, dándole seguimiento para la perpetración de la acción típica y, finalmente, llevando a cabo el plan, actuando, intimidando y luego matando a la víctima que opuso resistencia para lograr la sustracción del vehículo que conducía, utilizando armas de fuego que portaban como consecuencia de la planificación referida, hicieron todo lo que estaba bajo sus posibilidades de acción para lograr la sustracción, lo que no lograron ni aun dándole muerte a la víctima por razones ajenas a su voluntad.

Pese al homicidio motivado por el apoderamiento lucrativo perseguido por los autores y dirigido a su obtención, cometieron el homicidio “con ocasión” del robo. Resulta, a la luz de lo antes expuesto, que la circunstancia calificante del robo cometido forma irredargüiblemente parte de la actividad realizada en conjunto por Fuenzalida, Acevedo y Martínez-Conde, al realizar un hecho común que



interesaba al grupo y respecto del cual cada uno es partícipe conforme a los hechos probados, cuyas acciones individuales se consideran un hecho colectivo, ya que obedecen al cumplimiento de un objetivo común.

El acuerdo que liga a los coautores constituye un requisito objetivo de la coautoría, y esta exigencia se tuvo por acreditada por el Tribunal Oral. Luego, no resulta relevante determinar quién realizó los disparos o quién portaba las armas durante la comisión de los hechos, dado que existió entre los involucrados un acuerdo previo para llevar a cabo el delito, asignando tareas específicas a cada uno. Conforme a los principios de la teoría de la participación, es suficiente con que hayan tomado parte en la ejecución del acto para que se considere que hubo una coincidencia de voluntades orientada a la realización del delito y a la aceptación de sus consecuencias.

En tal sentido, los sentenciados Fuenzalida, Acevedo y Martínez-Conde son coautores del delito de robo con homicidio cometido en la persona de Stephano Hernández Urízar, ocurrido el 18 de marzo de 2023.

Respecto de la alegación relacionada con la supuesta exigencia de consumación del robo (sustracción) para poder calificar jurídicamente la conducta como la descrita en el artículo 433 N.º 1 cuando se comete homicidio “con ocasión” del robo —hipótesis que concurre en la especie—, resulta necesario señalar que este tribunal no adhiere a dicho planteamiento. Lo que se postula entonces por parte de los recurrentes es que si el robo y/o el homicidio no alcanzan la consumación, la figura del artículo 433 N.º 1 no tiene ninguna aplicación.



Superado está el argumento relacionado con el verbo “cometer” contenido en la descripción típica (que importaría que este solo puede sancionarse como delito consumado), pues dicho verbo integra numerosas disposiciones del Código Penal para la descripción de distintas conductas típicas, sin que ello haya sido entendido por la doctrina o la jurisprudencia como una exclusión a priori de sanción de la misma figura por el estado imperfecto alcanzado. Esta cuestión debe resolverse según el análisis de la estructura típica de cada tipo penal en particular y no exclusivamente según se haya utilizado o no ese verbo por el legislador.

El verbo referido “no tiene incidencia en las relaciones que deben darse entre el robo y los otros delitos que la norma menciona, sino que está orientado a reforzar los requerimientos a nivel de imputación subjetiva, como se desprende del cambio del verbo ‘resultar’ por ‘cometer’. Ello en atención a que un sector de la doctrina concebía el robo con homicidio como un delito calificado por el resultado” (Rodríguez Collao, “Robo con homicidio”, REJ N.º 11, 2009, p. 133). En el mismo sentido, Etcheberry sostiene que dicho refuerzo de los requerimientos a nivel de imputación subjetiva está relacionado con el dolo del agente que debe cubrir ambas acciones —coautoría subjetiva a la que nos referimos más arriba—, encontrándose la acción de matar subordinada ideológicamente a la apropiación.

En consecuencia, el artículo 433 N.º 1 no exige que el robo y el homicidio se consumen para que esa figura tenga aplicación. No existe en el hecho N.º 4 descrito por el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar un concurso real (como el que postularon las defensas al momento de realizar sus peticiones de sentencia de reemplazo) ni aparente entre un homicidio simple y un robo con intimidación frustrado, pues esta tesis equivoca la ratio legis del tipo penal agravado, que es —



como ha sido dicho desde antiguo por esta Corte— imponer una pena más severa a quien, en su afán de obtener un beneficio económico, no duda en causar la muerte de una persona. Esto evidencia un grave nivel de desprecio por la vida y una conducta altamente antisocial que justifica una sanción más estricta.

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, el error de derecho denunciado en relación con el artículo 433 N.º 1 del Código Penal, por las defensas de los sentenciados Fuenzalida, Acevedo y Martínez-Conde, no puede prosperar.

6º) Que, también fue una causal común invocada en los recursos de nulidad, la contenida en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 351 del mismo cuerpo legal y 74 del Código Penal. Esta causal fue incluida en los libelos presentados por las defensas de Edward Fuenzalida, Miguel Acevedo, Matías Peralta, Maximiliano Fuenzalida y Luis Martínez-Conde.

Se alegó dicha causal de nulidad respecto de la determinación de la pena de los delitos que forman parte del hecho N.º 4 consignado en el fallo en análisis, postulándose por los recurrentes que los tres delitos de homicidio de funcionarios de Carabineros en ejercicio de sus funciones, cometidos el 26 de marzo de 2023 —uno consumado en perjuicio de la Suboficial Mayor Rita Olivares Raio, y dos delitos de homicidio tentado en perjuicio del Sargento 1.º José Luis Quezada Flores y el Sargento 2.º Ronald Arol Rivera—, debían castigarse con una pena única de presidio perpetuo simple por aplicación de lo dispuesto en el artículo 541 del Código Procesal Penal. Los sentenciadores, sin embargo, aplicaron dicha norma únicamente a los delitos de homicidio tentado, por los cuales se impuso a cada uno de los condenados una pena privativa de libertad única de 10 años y un



día de presidio mayor en su grado medio. Respecto del delito de homicidio consumado, se determinó una pena de presidio perpetuo simple.

Los sentenciadores, en su considerando sexagésimo noveno, en el ejercicio de determinación de la pena, señalan fundadamente:

“La posibilidad de aplicar una pena única por los tres ilícitos ha sido descartada por estos sentenciadores, desde que la única forma de reflejar el mayor disvalor que posee la conducta delictiva que recayó en la persona de la Suboficial Mayor Rita Olivares Raio sería establecer una pena única de presidio perpetuo calificado por los tres delitos. Esto no es la opción más favorable para los sentenciados, dado el carácter imperfecto de desarrollo de los otros dos homicidios. En tal sentido, considerando que los dos delitos de homicidio en contra de funcionarios de Carabineros en ejercicio de sus funciones, respecto de los Sargentos Rivera y Quezada, están en grado de desarrollo tentado, la pena debe rebajarse en dos grados del mínimo, quedando, entonces, en el rango del presidio mayor en su grado mínimo, entre 5 años y 1 día y 10 años. La pena, si aplicamos el artículo 74 del Código Penal, se sitúa en 10 años y 2 días, por lo que, a su respecto, es más favorable aplicar el artículo 351 del Código Procesal Penal y elevar la pena en un grado, fijando la sanción en el extremo inferior del presidio mayor en su grado medio. Finalmente, en relación con el delito de homicidio a funcionaria de Carabineros en el ejercicio de sus funciones consumado, que afectó a la Suboficial Mayor Rita Olivares Raio, se tendrá en cuenta la prueba aportada por el Ministerio Público en la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal, que permite concluir que la acción homicida ejecutada, aunque ya se ve exasperada por la calidad de funcionaria de Carabineros de la víctima, posee un incremento



en su disvalor en el presente caso al considerar las circunstancias personales de la Suboficial Mayor Rita Olivares Raio. Tal como describieron en la audiencia los testigos María Luz Raio Malo —madre de la víctima— y Luis Gonzalo Tapia Carrasco —pareja de Rita Olivares Raio—, se conoció que la Suboficial Mayor tenía planes para contraer matrimonio prontamente, lo que se vio truncado por su fallecimiento, que dejó a dos hijos menores de edad. Además de la pérdida irreparable de su progenitora, estos vieron alterada su dinámica familiar, saliendo del hogar materno para vivir con su padre, y deberán asumir la ausencia permanente de quien era su mayor referente proteccional. El Tribunal advirtió la profunda desazón y perjuicio anímico —incluso económico— que significó la muerte de Rita Olivares Raio para su familia y pareja. También hubo antecedentes expuestos por sus colegas —Rivera, Quezada y Campos— que denotaron que se trataba de una funcionaria sumamente apreciada y respetada en su unidad policial, cuyo deceso provocó un enorme impacto en ellos. La pena, por tanto, debe recoger necesariamente esta mayor extensión del mal provocado, y será regulada en el rango del presidio perpetuo simple”.

En los razonamientos transcritos, los sentenciadores no incurren en ningún error de derecho, como denuncian los recurrentes. En efecto, las defensas no solo no explican por qué o cómo tres delitos de homicidio de funcionarios de Carabineros en ejercicio de sus funciones deberían ser sancionados con una pena única igual a la que se determinó por el Tribunal Oral solo respecto de uno de ellos (el consumado), sino que, adicionalmente, los fundamentos transcritos resultan ajustados a derecho, razonando suficientemente acerca de la aplicación de la



pena en concreto respecto de cada uno de los sentenciados ya individualizados, y explicando claramente el procedimiento aplicado.

Como se indicó anteriormente, los fundamentos expuestos incluyen el ejercicio bajo cada uno de los dos regímenes posibles (artículo 351 del Código Procesal Penal o artículo 74 del Código Penal), para que el lector comprenda por qué se optó por uno u otro de ellos, bajo la premisa legal de aplicar el que resulte más favorable al sentenciado.

Las defensas cuestionan la determinación de la pena del delito consumado, la cual se basó en la extensión del mal causado. Desde allí realizan un proceso intelectual distinto, en el cual sus defendidos se verían más favorecidos por la aplicación de la regla de determinación de pena del artículo 351 del Código Procesal Penal. Al respecto, cabe señalar que es atribución de los sentenciadores considerar la extensión del daño para determinar el quantum de la pena, debiendo, eso sí, exponer las razones o motivos para ello. En este caso, tuvieron en cuenta la prueba aportada por el Ministerio Público en la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal.

Como puede apreciarse, en el fallo recurrido se desarrollan adecuadamente y en el ámbito de sus atribuciones las operaciones de determinación de la pena en el caso concreto. Se decidió, en definitiva, condenar bajo un régimen de igualdad a todos los acusados que resultaron condenados por los delitos en análisis, imponiendo la misma pena ante la inexistencia de circunstancias modificatorias respecto de estos ilícitos y en atención a la extensión del mal causado. De lo anterior resulta la ausencia del presunto yerro reclamado, por lo que la causal no puede prosperar.



7°) Finalmente, la defensa de los sentenciados Matías Peralta, Maximiliano Fuenzalida y Elizabeth Soto invocó como causal de nulidad la contenida en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, argumentando la errónea aplicación del derecho al determinar la pena de uno de los delitos contenidos en el hecho N.º 5 de la sentencia, esto es, el contemplado en el artículo 3 de la Ley N.º 20.000. Se alegó que las sustancias estupefacientes encontradas en poder de los tres sentenciados, cuyo hallazgo fue logrado en la ejecución de una autorización judicial de entrada y registro en el domicilio ubicado en la Población Las Palmas, Block 265, Departamento 24, Cerro Los Placeres, Valparaíso, el 28 de marzo de 2023, serían constitutivas del delito de tráfico de pequeñas cantidades, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley N.º 20.000, y no en el artículo 3 de la misma ley.

En relación con la calificación jurídica realizada por el Tribunal Oral respecto de los hechos vinculados con la droga incautada, esta Corte coincide plenamente con el razonamiento expuesto en la sentencia recurrida. Según se advierte de su lectura, las defensas de los sentenciados alegaron que la cantidad de droga decomisada debería subsumirse en el delito de microtráfico, tipificado en el artículo 4 de la Ley N.º 20.000. No obstante, los hechos establecidos en el juicio oral permiten descartar razonablemente dicha hipótesis, tal como lo razonaron los jueces al calificar jurídicamente los hechos conforme al artículo 3 en relación con el artículo 1 de la Ley N.º 20.000.

Tal como se dijo en los considerandos que preceden, los hechos asentados por el Tribunal Oral limitan la labor de esta Corte, que no puede alterar las conclusiones fácticas determinadas en la sentencia recurrida. A partir de esas



conclusiones, se colige la calificación jurídica atribuida a los sentenciados, quienes han sido condenados con base en los hechos probados.

En efecto, el objeto material del delito de tráfico de estupefacientes se encuentra plenamente acreditado en este caso, conforme a los antecedentes rendidos y valorados en el juicio oral. Entre ellos destacan la cantidad de droga incautada, la diversidad de sustancias, la presencia de ovoides en que gran parte de la droga se encontraba contenida y elementos asociados al fraccionamiento y distribución, como una balanza digital. También se incluye el hallazgo de dinero en efectivo en distintas monedas, lo que refuerza la hipótesis de una actividad ilícita a gran escala. Asimismo, no se debe olvidar la existencia de armas y municiones encontradas en el lugar, las cuales, si bien constituyen infracciones autónomas reguladas por la Ley de Control de Armas, complementan el cuadro probatorio y dan cuenta de una actividad propia del tráfico ilícito previsto en el artículo 3 en relación con el artículo 1 de la Ley N.º 20.000.

Por tanto, no han errado los sentenciadores al concluir que los hechos acreditados satisfacen la figura típica referida. En consecuencia, la causal en estudio también será desestimada, al carecer de fundamento que permita alterar la calificación jurídica de los hechos.

POR TANTO, Y EN MÉRITO DE LO EXPUESTO:

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 373 letras a) y b), 374 letra e), y 384 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZAN** los recursos de nulidad deducidos por las defensas de los acusados Edward Fuenzalida Leiva, Miguel Acevedo Tauda, Luis Martínez-Conde Riesco, Matías Peralta Parra, Maximiliano Fuenzalida Leiva, Cristian Rodríguez Figueroa y Elizabeth Soto Soto, en contra de la sentencia



dictada el 25 de octubre de 2024, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar, y del juicio oral que le antecedió, los que, por tanto, no son nulos.

Redacción del fallo a cargo de la Ministra Sra. Gajardo.

Regístrese y devuélvase en su oportunidad.

Rol N° 58.404-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R. y Leopoldo Llanos S., las Ministras Sras. María Cristina Gajardo H. y María Teresa Letelier R., y el Abogado Integrante Sr. Raúl Fuentes M. No firman el Ministro Sr. Valderrama y las Ministras Sras. Letelier y Gajardo, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con licencia médica el primero y haciendo uso de sus feriados legales la segunda y tercera integrante.



En Santiago, a treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

